Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha **diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.**

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **05243/INFOEM/IP/RR/2024**,promovido por **XXXXXXX,** a quien en lo sucesivo se le identificará como **el RECURRENTE**, en contra de la respuesta de la **Fiscalía General de Justicia del Estado de México,** en adelante el **SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El día **once de julio de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía Plataforma Nacional de Transparencia vinculada al Sistema de Acceso a la Información, la solicitud de información pública registrada con el número **00673/FGJ/IP/2024;** en la que se solicitó la siguiente información:

*“Se solicita información sobre todas las adscripciones, adscripción actual, todos los cargos anteriores, cargo actual, denuncias administrativas y/o penales y sanciones de la siguiente persona servidora pública: 1. Ignacio Bringas Castañeda. Asimismo, se solicita información sobre procesos penales que se hubieran iniciado en contra de la persona servidora pública mencionada anteriormente. Se pide desglosar por cargo o adscripción de la persona, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha y lugar de los hechos, fecha de la audiencia inicial, fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio, fecha y sentido de la última determinación judicial”*

1. Se eligió como modalidad en entrega la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculada al Sistema de Acceso a la Información.
2. El **quince de julio de dos mil veinticuatro** el **SUJETO OBLIGADO** giro el requerimiento de información para que la solicitud de información fuera atendida **00673/FGJ/IP/2024.**
3. **El ocho de agosto de dos mil veinticuatro** el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta por medio del Sistema de Acceso a la Información, mediante dos archivos electrónicos en formato pdf, cuyo contenido grosso modo es el siguiente.

***ACUERDO CLASIFICACIÓN 673.pdf:*** *Acuerdo de Clasificación de información de la solicitud de información* ***00673/FGJ/IP/2024,*** *mediante el cual refieren que se clasifica el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a si la persona referida en la solicitud de información forma o formo parte del personal* ***operativo*** *de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (de la revisión del acuerdo se observa que hacen falta las firmas del Comité de Transparencia).*

***OFICIO NÚMERO 02541-MAIP-FGJ-2024.pdf:*** *oficio de la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa que después de una búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal administrativo no se localizó a la persona referida en la solicitud de información.*

*Del contenido del oficio también refiere que se clasifica el pronunciamiento respecto de la búsqueda en la planilla del personal operativo, toda vez que corresponde a información de carácter reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 140, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

1. Inconforme con la respuesta, el **veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro,** el entonces solicitante interpuso el recurso de revisión de mérito, manifestando las siguientes razones o motivos de inconformidad:

* **Acto impugnado:** *“PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN Primero, cabe aclarar que se solicitó información sobre el cargo, la trayectoria institucional y el desempeño de una persona servidora pública, sin solicitar datos personales como domicilio, familia y contacto. Tampoco se pidió información sobre su modus operandi, itinerario de actividades o medidas de seguridad adoptadas por el sujeto obligado para garantizar la seguridad de la persona (por ejemplo, si cuenta o no con elementos de seguridad y con cuantos). Es relevante conocer quiénes son los servidores públicos y cómo desempeñan sus funciones, incluidos los que desempeñan cargos relacionados con la seguridad pública, para mantener la transparencia y la rendición de cuentas. Reservar la información es contradictorio con los principios democráticos y de transparencia. Proporcionarla no pone en riesgo la seguridad de la persona ni del Estado, ya que el objetivo es conocer la trayectoria institucional de manera legal. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el acceso a la información sobre la trayectoria del personal de seguridad y la garantía de su seguridad y la del Estado. Datos necesarios para evaluar el desempeño profesional deben divulgarse, mientras que los relacionados con la vida privada o las medidas de seguridad pueden estar sujetos a reserva legal. SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN La solicitud de información no se ubica en el supuesto de lo resuelto por la Suprema Corte en la Controversia Constitucional 325/2019, por lo que no es aplicable al caso que nos ocupa. La resolución se dio en el contexto de una petición de información de nombres y cargos de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías de la Fiscalía General de la República. La Corte se refirió principalmente a la protección de la identidad y datos del personal operativo que realiza funciones altamente sensibles. En contraste, la solicitud que nos ocupa se refiere a una persona ya identificada por nombre, cuyos cargos anteriores o actual, pueden o no estar relacionados con funciones, incluso operativas, que justifiquen el mismo nivel de reserva. En el caso del que se ocupó la CC 325/2019, la FGR: "[I]dentificó que el nivel de riesgo aumenta o disminuye dependiendo del tipo de función que lleva a cabo la persona servidora pública y la entidad federativa en la que desempeña sus labores, es decir, no es el igual —en términos porcentuales— el riesgo que asume un agente de la Policía Federal Ministerial que desempeña sus funciones en el combate a la delincuencia organizada en el Estado de Colima que un perito que desempeña sus funciones en el esclarecimiento de hechos por la comisión de un delito financiero en la Ciudad de México." La reserva de información de la FGJEdomex no realiza un análisis sobre los niveles de riesgo y es insuficiente su mera afirmación de que dar información pone en riesgo a la persona cuya información se solicitó, o la seguridad pública de la entidad. La autoridad no aporta evidencia alguna para probar la existencia del nexo causal entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública y personal del servidor público. Aspecto clave de la CC325/2019. Contrario a lo que establece la Fiscalía, la información solicitada es interés público al tratarse de actos o conductas del servidor público en el desempeño estricto de sus funciones, no de su vida personal. De manera que la sola entrega de la información relacionada con procesos sancionatorios en su contra, no pone en riesgo ni la seguridad pública ni la personal de dicho servidor público. Al encontrarnos frente a una solicitud de información relacionada con la rendición de cuentas sobre un servidor público, especialmente en cuanto a su historial en la institución y los posibles procesos iniciados en su contra, no se justifica la clasificación de dicha información como reservada. Así, debe priorizarse la aplicación del principio de máxima publicidad por no encontrarse debidamente acreditada, probada y justificada una excepción..*”
* **Razones o Motivos de inconformidad:** “*----------------”*

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de fecha **cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro**, se puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, y el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. De lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** el **dos de octubre de dos mil veinticuatro** entregó tres archivos electrónicos en formato pdf, cuyo contenido grosso modo es el siguiente.

***ACTA SE-24-2024.pdf:*** *Acta de la Sesión Extraordinaria Número 24/2024, mediante la cual en el numeral siete se encuentra el Acuerdo de Clasificación de información de la solicitud de información* ***00673/FGJ/IP/2024,*** *mediante el cual refieren que se clasifica el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a si la persona referida en la solicitud de información forma o formo parte del personal* ***operativo*** *de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (de la revisión del Acta del Comité de Transparencia ya se encuentran las firmas de quienes participaron como integrantes de dicho Comité).*

***INFORME JUSTIFICADO RR 5243 SOL.673.pdf:*** *informe justificado mediante el cual la Titular de la Unidad de Transparencia, ratifica su respuesta en cuanto a que clasifica la búsqueda en el sistema del personal operativo porque de serlo así pondría en riesgo, por lo cual el pronunciamiento no se puede ser en sentido afirmativo o negativo.*

***Del mismo informe justificado se observa que la Titular de la Unidad de Transparencia, remite el link*** [***https://infoem2.ipomex.org.mx/ipomex/#/info-fraccion/28/268/12***](https://infoem2.ipomex.org.mx/ipomex/#/info-fraccion/28/268/12)***, del cual refiere que el RECURRENTE puede consultar las sanciones a servidores públicos que se encuentran publicadas en la página del ipomex 4.0 del SUJETO OBLIGADO.***

***of I.J. 2993 RR 5243\_2024\_10\_02\_23\_43\_46\_515.pdf:*** *oficio de la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante la cual informa que se adjunta el Informe Justificado, mediante el cual se señalan los razonamientos lógico-jurídicos.*

1. Por su parte el **RECURRENTE** dejó de realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera.
2. El **trece de febrero de dos mil veinticinco**, la Comisionada Ponente notificó el acuerdo de ampliación para emitir resolución.
3. Este organismo garante no pasa por alto explicar que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra su justificación en que, el alto número de recursos de revisión recibidos ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la elaboración de resoluciones a dichos medios de impugnación.
4. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
5. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
6. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
7. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Seguidamente el día **diecinueve de febrero de dos mil veinticinco**, se decretó el cierre de instrucción, por lo que no habiendo más que hacer constar, y —-----------------------------------------------

**C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. Los medios de impugnación fueron presentados a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó sus respuestas el **ocho de agosto de dos mil veinticuatro**, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del día del **nueve al veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro**; en consecuencia, el ahora **RECURRENTE** presentó sus inconformidades el día **veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro**; es decir dentro del lapso legalmente establecido para tal efecto.
2. Por otro lado, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre completo o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*“****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.”*

1. Robusteciendo lo anterior se encuentra lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

*“****Artículo 6.-*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”(Sic)*

1. Así como el artículo 5 fracción III, párrafo vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que determina lo siguiente:

*“****Artículo 5.-*** *En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece”.(Sic)*

*…*

*Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*...*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;*

*...*

*VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.” (Sic)*

1. Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se destaca lo siguiente:

*“****Artículo 1****. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”(Sic)*

1. Esto es, que el derecho humano de acceso a la información pública, se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su interposición, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho *derecho fundamental exime a quien lo ejerce*, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
2. Lo que se fortalece con el Criterio 6/2014 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se reproduce para una mayor referencia:

*“Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que el solicitante acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º., apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, 2º, 4º y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores requisitos que los establecidos en la Ley. En este sentido, las dependencias y entidades, sólo deberán asegurarse de que, en su caso, se haya cubierto el pago de reproducción y envío de la información, mediante la exhibición del recibo correspondiente.”(Sic)*

1. Asimismo, los escritos contienen las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.
2. Asimismo, los escritos contienen las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. De las constancias en el expediente al rubro indicado, se desprende que la particular solicitó la información que a continuación se desagrega:

***De Ignacio Bringas Castañeda:***

* ***Adscripciones, adscripción actual, cargos anteriores, cargo actual.***
* ***Denuncias administrativas y/o penales y sanciones.***
* ***De los procesos penales desglosar por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha y lugar de los hechos, fecha de la audiencia inicial, fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial.***

1. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** entrego la siguiente información.

***ACUERDO CLASIFICACIÓN 673.pdf:*** *Acuerdo de Clasificación de información de la solicitud de información* ***00673/FGJ/IP/2024,*** *mediante el cual refieren que se clasifica el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a si la persona referida en la solicitud de información forma o formo parte del personal* ***operativo*** *de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (de la revisión del acuerdo se observa que hacen falta las firmas del Comité de Transparencia).*

***OFICIO NÚMERO 02541-MAIP-FGJ-2024.pdf:*** *oficio de la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa que después de una búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal administrativo no se localizó a la persona referida en la solicitud de información.*

*Del contenido del oficio también refiere que se clasifica el pronunciamiento respecto de la búsqueda en la planilla del personal operativo, toda vez que corresponde a información de carácter reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 140, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

1. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 179, **fracción II** de la Ley **de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y Municipios**; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa a la clasificación de la información; contexto del cual se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad.
2. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el **SUJETO OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada; asimismo, determinar si se vulnera el derecho de acceso a la información del particular por la inobservancia a los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señala entre otros, que en la generación y entrega de información se deberá garantizar que sea oportuna, expedita, completa e integral.

**CUARTO. Del estudio y resolución del estudio.**

1. **Del derecho de acceso a la información.**
2. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
3. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

*“****Artículo 1.-***

*(…)*

*Todas las* *autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)*”.

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero del mismo artículo.
2. Así, conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

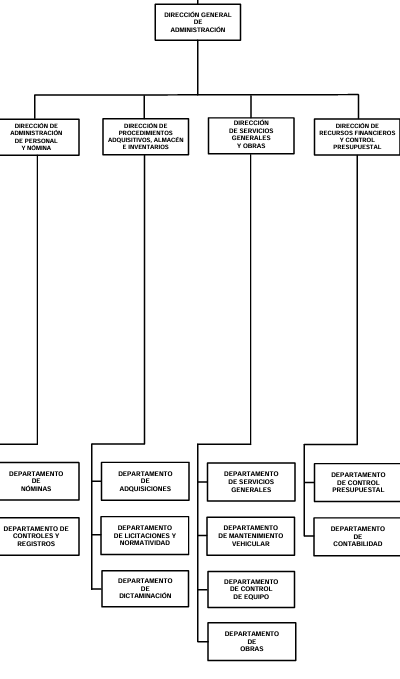
***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

1. Según el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
3. Así entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.

**II. De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO**

1. De lo anterior, se debe de establecer que la información solicitada consiste en conocer si la persona referida en la solicitud de información tiene relación con procedimientos administrativos y penales, por lo que el estudio se centrara en los mismos.
2. En primer punto, se debe de referir que el **SUJETO OBLIGADO** por medio de la Dirección de Administración de Personal y Nómina, informo que del personal administrativo la persona referida en la solicitud de información no forma parte de la plantilla, mientras que para el caso de del personal operativo refiere que clasifica el pronunciamiento del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo.
3. P46. ara delimitar esferas competenciales, resulta oportuno analizar el Organigrama del Sujeto Obligado, por lo que es necesario traer a colación la siguiente imagen:



1. De lo anterior, se tiene que el Sujeto Obligado cuenta con diversas unidades administrativas, siendo de nuestro interés la Dirección de Administración de Personal y Nómina, misma que depende de la Dirección General de Administración.
2. En virtud de lo anterior, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en sus artículos:

**Atribuciones de la Dirección General de Administración**

Artículo 35. Al frente de la Dirección General de Administración habrá un Director General, quien se auxiliará de las unidades administrativas y servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.

Corresponde a la Dirección General de Administración las atribuciones siguientes;

IX. **Integrar los expedientes de los servidores públicos y tramitar la expedición de nombramientos**, autorización de licencias, cambios de adscripción, hojas de servicio, bajas, credenciales, constancias, diplomas y todos los demás documentos que deban ser integrados en los mismos, estableciendo el sistema de registro;

Artículo 45. Los resultados de las evaluaciones de ingreso deberán mantenerse en reserva; salvo lo dispuesto en la Ley General del Sistema y otras disposiciones jurídicas. Reunidos los requisitos, aprobados los exámenes y las evaluaciones, así como realizado el examen de control de confianza, el Procurador seleccionará a quienes ingresarán al servicio de la Procuraduría y procederá a la designación o nombramiento respectivo.

…

1. Así la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, establece lo siguiente:

Artículo 2. Para los efectos aplicación e interpretación de esta Ley se entiende por:…

**VIII. Personal Operativo**: a las y los agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación, las y los orientadores jurídicos, las y los facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y **servicios periciales**.

1. En ese sentido, se debe de establecer que el **SUJETO OBLIGADO** solo turno la información a la Dirección de Administración de Personal y Nómina, por lo que de acuerdo con el Manual de Organización de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el **SUJETO OBLIGADO** cuenta en su estructura con la Contraloría Interna, quien tiene las siguientes funciones.

***2130P0000 CONTRALORÍA INTERNA***

***OBJETIVO:***

*Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como revisar y evaluar el grado de eficacia, eficiencia y calidad con que se alcanzan sus objetivos institucionales y metas de trabajo, haciendo las recomendaciones necesarias para mejorar su funcionamiento integral.*

*FUNCIONES:*

***Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Instrumentar los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.***

*Cumplir con el Programa Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan. Acordar la suspensión temporal de servidores públicos durante la substanciación del procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dando aviso a la autoridad correspondiente.*

***Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.***

*Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada acciones de mejora, derivadas de las acciones de control y evaluación practicadas, tendientes a fortalecer el control interno y la gestión de la Procuraduría General de justicia del Estado de México, así como vigilar su implementación.*

*Dar seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de las acciones de control y evaluación, así como de las realizadas por auditores externos y, en su caso, por otras instancias de fiscalización.*

*Elaborar diagnósticos sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con base en las acciones de control y evaluación realizadas.*

*Promover el fortalecimiento de mecanismos de control de la gestión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México e impulsar el autocontrol y la autoevaluación en el cumplimiento de planes, programas, objetivos y metas, así como la mejora continua de los procesos y servicios públicos.*

*Dar vista a la autoridad competente de los hechos que tenga conocimiento que puedan ser constitutivos de delitos; e instar al área facultada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para formular, cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar. - Realizar, ante las diversas instancias jurisdiccionales, la defensa jurídica de las resoluciones que emitan.*

*Proponer al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a los titulares de las unidades administrativas a la dependencia; las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que mejoren las acciones de control y evaluación, así como de responsabilidades.*

*Solicitar a las unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones.*

*Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece la normatividad aplicable.*

*Informar a la Secretaría de la Contraloría del resultado de las acciones, comisiones o funciones encomendadas, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.*

*Realizar auditorías y evaluaciones a las unidades administrativas de la Procuraduría, con el fin de promover la eficacia y transparencia en sus operaciones y verificar, de acuerdo a su competencia, el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.*

*Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, solicitando información relacionada con las operaciones que realizan, y fincar las deductivas y responsabilidades que, en su caso, procedan.*

*Intervenir en concursos y fallos tanto de adquisiciones como de obra pública según corresponda, así como en la entrega y recepción de oficinas públicas y en todos aquel:os actos administrativos que establezca la normatividad vigente.*

*Verificar la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Procuraduría.*

*Inspeccionar y vigilar que la Procuraduría cumpla con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos asignados a cada dependencia.*

*Difundir entre el personal de la Procuraduría toda disposición en materia de control que incida en el desarrollo de sus funciones.*

*Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.*

1. De lo anterior, se colige que la Contraloría Interna, es el área encargada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de atender las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos del **SUJETO OBLIGADO**, situación por la se debió de turnar la solicitud de información a dicha área para que hubiera pronunciamiento de la misma.
2. Asimismo conforme al acuerdo número 10/2017, por el que se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 7 de julio de 2017, se indica que cuenta con las siguientes atribuciones y competencia:

*Atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción*

*TERCERO.- Corresponde al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por si o por conducto de los servidores públicos que le estén adscritos, además de las atribuciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el ejercicio de las siguientes:*

*I. Ejercer las atribuciones establecidas en los artículos 29 BIS y 34 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado;*

*II. Iniciar, recibir, realizar y determinar las investigaciones de los asuntos a su cargo;*

*III. Establecer comunicación constante y permanente con el denunciante y testigos de hechos para el desarrollo de la investigación correspondiente;*

*IV. Practicar las actuaciones necesarias para obtener datos de prueba que establezcan el hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como para la reparación del daño;*

*V. Recabar de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios, y demás autoridades, en los términos de las disposiciones aplicables, los informes, documentos, opiniones y dictámenes necesarios para las investigaciones de su competencia;*

*VI. Solicitar informes y la exhibición de documentos a los particulares para el ejercicio de sus atribuciones y adecuado desarrollo de sus investigaciones;*

*VII. Llevar a cabo el aseguramiento, resguardo temporal y gestión del envío de los instrumentos, objetos y productos del delito, a las unidades o instituciones competentes para su administración o destino, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en coordinación con las unidades administrativas competentes;*

*VIII. Dictar y supervisar el cumplimiento de las medidas de protección para su debido cumplimiento; Solicitar al órgano jurisdiccional las técnicas de investigación, las medidas cautelares, el aseguramiento o embargo precautorio de bienes y demás diligencias que requieran control judicial para los fines de la investigación, así como para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte; X. Ejercer las facultades delegadas por el Fiscal General en materia de requerimientos en materia fiscal y sobre operaciones que las instituciones financieras celebren con sus clientes y, en los casos conducentes, ordenar el aseguramiento de los recursos, bienes y derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones aplicables;*

*XI. Solicitar a la Coordinación General de Servicios Periciales designe o habilite peritos en la especialidad que se requiera para la investigación de los delitos;*

*XII. Supervisar a las agencias del Ministerio Público de su adscripción, a los peritos, a los grupos de Policía de Investigación correspondientes y, en general, a los servidores públicos bajo sus órdenes, en coordinación con las unidades administrativas competentes;*

*XIII. Remitir a las autoridades correspondientes las investigaciones de delitos que no sean competencia del Ministerio Público del Estado de México o de la Fiscalía;*

*XIV. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión;*

*XV. Interponer los recursos procesales procedentes e impulsar el recurso hasta su resolución;*

*XVI. Participar en los procesos judiciales para la modificación o terminación de las penas y medidas de seguridad de su competencia;*

*XVII. Solicitar la intervención de la unidad competente para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal que lo requieran y asegurarse de la protección;*

*XVIII. Supervisar el respeto de los derechos y obligaciones de los imputados, de las víctimas y testigos en los procedimientos penales, en los asuntos de su competencia;*

*XIX. Procurar en el ámbito de su competencia, que la prestación del servicio de procuración de justicia se lleve a cabo de forma pronta y expedita;*

*XX. Coordinar su actuación con las autoridades federales, estatales o de otras entidades federativas y municipios, en la investigación y persecución de delitos de su competencia;*

*XXI. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal o Municipal Anticorrupción, la información contenida en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de la plataforma digital estatal que al efecto se establezca;*

*XXII. Realizar análisis patrimoniales y financieros requeridos en las investigaciones de su competencia, y*

*XXIII. Las demás que establezcan las Leyes aplicables, otras disposiciones jurídicas y el Fiscal General de Justicia del Estado de México*

*Competencia*

*QUINTO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será competente para investigar y perseguir delitos por hechos de corrupción, previstos en el Título Sexto, del Libro Segundo del Código Penal del Estado de México y los delitos conexos.*

1. Dicho lo anterior, resulta trascendente recordar que el particular requirió información sobre las adscripciones, adscripción actual, todos los cargos anteriores, cargo actual, denuncias administrativas y/o penales y sanciones en contra de un servidor público en específico por lo que no es ocioso mencionar que la interposición de una denuncia en contra de organismos o servidores públicos, por lo general, se deriva de un mal uso del poder o cargo público conferido, lo cual se relaciona completamente con delitos, infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por las y los servidores públicos**.**

* **De las Faltas Administrativas Graves y no Graves**

1. De lo anterior, se debe de establecer que un servidor público incurre en una falta administrativa no grave de acuerdo con lo regulado por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

***Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes****:*

*I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.*

1. *Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley.*

*V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.*

*VI. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.*

*VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso que el contratista sea persona jurídica colectiva, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que jurídicas colectivas.*

*VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.*

*IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.*

*X. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que tenga relación con motivo de éste.*

*XI. Observar un trato respetuoso con sus subalternos.*

*XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley.*

*XIII.Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.*

*XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.*

*XV. Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios.*

*XVI. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.*

*XVII. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información personal recomendada por las instancias competentes.*

*XVIII. Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, y*

*XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.*

*Artículo 51. También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público. Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente por parte del Órgano Superior de Fiscalización o de la autoridad resolutora. En caso de no realizar el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 79 de esta Ley cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.*

1. Ahora bien, en cuanto a las faltas graves la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, regula que incurra en una falta grave el servidor público que cometa u omita lo siguiente.

***Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:***

1. *El cohecho.*

*II. El peculado.*

*III. El desvío de recursos públicos.*

*IV. La utilización indebida de información.*

*V. El abuso de funciones.*

*VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.*

*VII. El actuar bajo conflicto de interés.*

*VIII. La contratación indebida.*

*IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.*

*X. El tráfico de influencias.*

*XI. El encubrimiento.*

*XII. El desacato.*

*XIII.La obstrucción de la Justicia.*

1. En esa línea, una vez que fue precisado lo anterior respecto de las faltas graves y no graves, se debe de indicar que las autoridades que tienen a cargo funciones dentro de la Contraloría Interna, tienen la obligación como servidores públicos de manejar la reserva y la secrecía de las quejas y denuncias o que se encuentren en su poder, por lo que, dichas autoridades no pueden publicar o dar información de los procedimientos que no han causado ejecución de sentencia.
2. Con lo anterior queda reafirmado que **EL SUJETO OBLIGADO** a través de su Contraloría Interna, es competente para conocer la información de mérito, en este sentido, se procede al análisis **de los supuestos de los procedimientos administrativos en los que procede la entrega de la información.**
3. Lo anterior, toda vez que existen excepciones para que se entregue la información solicitada con los procedimientos de investigación relacionados con actas administrativas, denuncias o actuaciones de oficio, como a continuación se precisa en el estudio.

* **Procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite.**

1. En principio es de señalar que el realizar un pronunciamiento sobre la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades en trámite, podría afectar al posible responsable, **ya que se daría a conocer la existencia de una investigación en su contra, lo cual, generaría una percepción negativa de estos, sin que se hubiere probado su responsabilidad o culpabilidad, lo cual dañaría, su honor y su derecho a la presunción de inocencia e inclusive su actividad profesional.**
2. En otras palabras, dar a conocer la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades en trámite, vulneraría la protección de su privacidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que se tenga una determinación firme, donde haya quedada acreditada su responsabilidad.
3. Respecto del **derecho a la privacidad**, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

*“****DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS****. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.”*

1. Como se observa, de la garantía de seguridad jurídica de un individuo a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Es decir, en el artículo 16, primer párrafo constitucional, se da el reconocimiento de un derecho a la privacidad de las personas que implica no ser sujeto de injerencias arbitrarias, intromisiones o molestias en el ámbito reservado de su vida o intimidad, ni de ataques a su honra o a su reputación, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
3. Por lo que hace al derecho al honor, la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, señala:

***“DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el* ***concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social****. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.”*

1. Como se observa, el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.
2. En el ámbito de lo jurídico, es un Derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.**
3. Adicionalmente, en relación a este derecho [al honor], el máximo tribunal también ha señalado que aunque no esté expresamente contenido en la Carta Magna, ésta obliga su tutela en términos de lo previsto en el artículo 1° Constitucional, como se muestra en la tesis aislada número I.5o.C.4 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro XXI, de junio de 2013, página 1258, de la Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.*** *Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.”(Sic)*

1. Tocante a la **presunción de inocencia,** es de mencionar que toda persona imputada tiene, entre otros, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, donde compruebe su culpabilidad. tal como lo prevé la fracción I del apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 5, página 497, de abril de 2014, Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL****. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.”*

1. De la jurisprudencia transcrita deviene que la presunción de inocencia se traduce en el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, siendo importante mencionar que dicho Derecho se encuentra regulado, de la misma manera, en Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. En el mismo orden de ideas, la tesis aislada número 2a. XXXV/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, página 1186, de la Novena Época, materia constitucional y penal, establece:

***“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.*** *El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.”*

1. Como se observa, el Alto Tribunal sostiene que el principio de presunción de inocencia va más allá del ámbito estrictamente procesal, en aras de proteger la esfera jurídica de la persona que se ve en peligro ante actuaciones arbitrarias por parte del poder público. Así, dicho principio guarda también una faceta “extraprocesal” que se materializa a través de un trato de inocente para el inculpado mientras no se demuestre su culpabilidad.
2. Conforme a lo expuesto, **el entregar el nombre y cargo de la persona referida en la solicitud de información de ser el caso que hubiera o sea servidor público cuyos procedimientos se encuentre en trámite de probable responsabilidad, generaría un juicio a priori o un juicio negativo en contra del servidor público por parte de la sociedad, sin que se hayan reunido los elementos para establecer si es o no responsable, vulnerando así la protección de su intimidad, su honor, la buena imagen y su derecho a la presunción de inocencia.**
3. Bajo lo previo, se considera que **la clasificación del nombre y cargo sobre la existencia de algún procedimiento en trámite de responsabilidad por faltas graves o no graves que se hubiera iniciado en contra de la persona referida en la solicitud de información de ser el caso que hubiera o sea servidor público, deberá clasificarse en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”*

1. Ahora bien, **el Sujeto Obligado refiere** que en el personal administrativo no encontró información y respecto al personal operativo remite el Acuerdo de Clasificación mediante el cual clasifica el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a si la persona referida en la solicitud de información forma o formo parte del personal operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que se resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que se trate de información clasificada (confidencial o reservada), en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia; entendiendo a esta información, de conformidad con el artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la siguiente manera:

* **Información confidencial:** Se considera como información confidencial los **secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.**
* **Información privada:** La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.
* **Información reservada:** La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley.

1. En resumen, se determina que, excepcionalmente, la información pública, podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley de Transparencia; **así como confidencial, tratándose principalmente de aquella que refiera a la información privada y datos personales concernientes a una persona física.**
2. En virtud de lo anterior, se desprende que los Acuerdos de Reserva deberán de cumplir parámetros de forma y fondo, los cuales se abordan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| **Número de folio de la solicitud** | **Sí** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **No** |  |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **Parcialmente** |  |
| **Fundamento y Motivación Legal** | **No**  No se considera que las causal de reserva referidas en el acta del Comité de Transparencia **(140, fracción XI)** sea aplicable |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información** | **Parcialmente** |  |
| **Prueba de Daño** | | |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable**  **(Modo, Tiempo y Lugar)** | **Parcialmente** |  |
| **Temporalidad de la Reserva de la información** | **Sí** |  |
| **Autoridades competentes.** | Hacen falta firmas del Comité de Transparencia |  |

1. Ahora bien, este Órgano Garante una vez hecho el análisis de la información solicitada por el hoy recurrente, considera que, la entrega de la misma **compromete la seguridad pública**, además de que pone en **riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física**, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables por lo que es correcta su clasificación como información **RESERVADA**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 91 y 140, fracciones I, y IV, de la Ley de Transparencia Estatal, que a la letra establecen lo siguiente:

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*(…)*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*(…)*

***IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;***

1. Es así que, si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información requerida, también lo es que el derecho de acceso a la información pública puede ser restringido cuando se trate de información clasificada como **RESERVADA**, delimitando una serie de hipótesis de hecho en las cuales descansa la posibilidad de reserva de información, por lo que dentro la información que generen, posean o administren los Sujetos Obligados, se considerará reservada cuando **compromete la seguridad pública**, además de que pone en **riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física**, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
2. En el caso en particular, es necesario limitar la publicación de la información solicitada, ya que podría poner en riesgo la seguridad pública, sin soslayar que la misma tiene el carácter de **RESERVADA** por disposición expresa del artículo 110, en relación directa con la fracción II, del artículo 5, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que su difusión, facilitaría a células delictivas el neutralizar las acciones, implementadas o por implementar, en materia de seguridad pública para la preservación del orden y la paz pública, preceptos legales que a la letra señalan:

***Artículo 5.-*** *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

***II. Bases de Datos:******Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública****, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información;*

***Artículo 110.-*** *Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión de sus Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, se adoptarán los mecanismos tecnológicos necesarios para la interconexión en tiempo real y respaldo de la información.*

*La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.*

***Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de*** *detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada,* ***armamento y equipo,*** *vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.*

1. Es por ello que se advierte que la información solicitada debe ser clasificada como reservada de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral vigésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como los artículos 91, 128, 129, 140, fracción V, numeral I y 141, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, preceptos legales que a la letra establecen:

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

***Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I.*** *Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;*

***V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;***

***VI.*** *Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*

***VII.*** *Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

***VIII.*** *La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***IX.*** *Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

***X.*** *Afecte los derechos del debido proceso;*

***XI.*** *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

***XII.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*

***XIII.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Vigésimo cuarto.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*

***II.*** *Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

***III.*** *La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*

***IV.*** *Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.***

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129.*** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:*

***I.*** *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*

***II.*** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*

***III.*** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;***

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;***

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Artículo 141.*** *Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.*

1. Cabe precisar que la clasificación es un acto administrativo mediante el cual se restringe el derecho de acceso a la información, mediante el cual los **Sujetos Obligados** determinan que la información requerida actualiza alguno de los supuestos de confidencialidad **o reserva,** de acuerdo con las bases y los principios inmersos en la normatividad aplicable.
2. Por lo que para realizar la reserva de la información no basta con exponer alguna de las causales previstas en la Ley de Transparencia local, en sentido contrario dicha valoración debe de realizarse a través de la “prueba de daño” que consiste en exponer los argumentos y razones, basados en elementos objetivos o verificables, a partir de los cuales se derive que la divulgación de información, en particular, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés protegido.
3. En consecuencia, el **Sujeto Obligado**, deberá realizar la prueba de daño y precisar las razones por las cuales la apertura de la información generaría una afectación, para ello referir que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, además establecer que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida; pues, podría comprometer las tareas de seguridad pública e incluso poner en, riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física.
4. En este punto es importante resaltar que los sujetos obligados son los que cuentan con la atribución exclusiva de analizar y ponderar si la información que poseen actualiza alguna de las hipótesis previstas en las fracciones citadas, mediante la aplicación, caso por caso de la **prueba de daño**. Esto en apego a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XXXIII, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Transparencia local, como se observa a continuación:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XXXIII.******Prueba de Daño:******Responsabilidad de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley****, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente debe clasificarse como reservada;*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además,* ***el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño****.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129****.* ***En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación****, justificando que:*

1. *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*
2. *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*
3. *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 130. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia****, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.*

***Artículo 131. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en esta Ley corresponderá a los sujetos obligados****; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

1. Del mismo modo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas establecen con relación al a prueba de daño lo siguiente:

***Prueba de daño:******La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable*** *y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; (…)*

1. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación emitió las tesis con número de registro 2011541[[5]](#footnote-5) y 2018460[[6]](#footnote-6) en las que, respectivamente, se dispone lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES.***

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además señala, como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio de lo anterior****, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación****. Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior* ***se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder*** *y, contra la decisión que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia,* ***la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligado****s, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa de las partes".*

***PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.***

*De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016,* ***la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta****. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así,* ***la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular.*** *Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.*

1. Por lo tanto, con base en el estudio a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y **que la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, mediante la formación de la prueba de daño**.
2. De lo argumentado anteriormente se desprende que los sujetos obligados al ser quienes generan, poseen o administran la información en uso de sus atribuciones de derecho público, son a quienes corresponde exclusivamente realizar la aplicación de la prueba de daño a la información que obra en sus archivos, y, mediante su realización, aportar los argumentos necesarios para demostrar fehacientemente que la divulgación de la información provoca un daño a un interés jurídicamente protegido.
3. No obstante, de lo anterior se estima necesario traer a colación el contenido del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

***“Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado*** *cuando:*

*…*

***IV****.* ***Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

1. Del precepto citado se desprende que aquella información que se relacione con actos de corrupción, no puede actualizar alguno de los supuestos de clasificación como información reservada establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. En el mismo tenor, el Lineamiento Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, dispone que no puede invocarse el carácter de reservado de la información **cuando esta se relacione con actos de corrupción,** en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
3. Mientras que el Código Penal Federal establece en su Título Decimo “Delitos por hechos de corrupción” a los siguientes:

* Ejercicio ilícito de servicio público (artículo 214)
* Abuso de autoridad (artículo 215)
* Coalición de servidores públicos (artículo 216)
* Uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 217)
* Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos (artículo 217 Ter)
* Concusión (artículo 218)
* Intimidación (artículo 219)
* Ejercicio abusivo de funciones (artículo 220)
* Tráfico de Influencia (artículo 221)
* Cohecho (artículo 222)
* Cohecho a servidores públicos extranjeros (artículo 222 bis)
* Peculado (artículo 223)
* Enriquecimiento Ilícito (artículo 224)

1. Siendo dicha información de gran trascendencia, ya que al estar involucrados servidores públicos existe una afectación directa al interés público en torno a las atribuciones de los entes públicos, como lo es, de manera enunciativa, más no limitativa, la administración de su patrimonio, la erogación de recursos públicos o la recaudación de contribuciones, derechos, impuestos, etcétera, lo cual afecta no sólo al ente público sino a toda la sociedad en general.
2. En función de lo expuesto, y considerando las conductas que pudieran ser investigadas, es que el derecho de acceso a la información cobra una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través del ejercicio de éste se puede conocer información relacionada con hechos de corrupción, que además por la importancia que ésta tiene para el erario municipal, resulta de mayor interés el impacto que dichas conductas pudieron tener en su detrimento, encuadrando en los artículos 3, fracción XXII y 9, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, este Instituto establece como:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XXII. Información de interés público:*** *Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados*

*…*

***Artículo 9.*** *El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:*

*…*

***VII. Máxima Publicidad:*** *Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática…”*

1. De lo anterior, se colige que, el interés público está relacionado con el principio de máxima publicidad y las excepciones a la clasificación de la información; pues existe un interés general de la sociedad de conocer sobre los posibles actos de corrupción al no ser afectaciones que se dan en lo individual, sino que existe un detrimento en un grupo o en la población en general.
2. Por tal motivo, se considera para el caso de que existiera algún expediente relacionado con faltas administrativas en trámite, y que estén relacionados con alguna excepción de las establecidas en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tales como actos de corrupción, se **deberá entregar el soporte documental correspondiente que dé cuenta del nombre y cargo de los servidores públicos cuyos procedimientos se encuentren concluidos y que hayan causado estado, por faltas administrativas graves condenatorias, así como de aquellos que se encuentren en trámite relacionados con actos de corrupción, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia Local, del primero de enero al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en versión pública, conforme al considerando quinto del presente fallo.**
3. Siendo importante mencionar que si bien entregar el nombre y cargo respecto a la existencia de un procedimiento de sanción administrativa, podría generar una percepción negativa de éste, ocasionando un perjuicio en su **honor, intimidad, buena imagen y nombre, así como a su vida privada,** también lo es, que **tratándose de asuntos relacionados con actos de corrupción, se trataría de una falta grave, por lo que tales prerrogativas quedan supeditadas al interés mayor de conocer tales eventualidades y por lo tanto no procede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.**
4. Aunado a lo anterior, cierto es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta en tanto se demuestre lo contrario, sin embargo, en el caso de actos de corrupción nos encontramos ante un caso de trascendencia social e interés público, sobreviniendo una colisión entre derechos fundamentales, esto es, por una parte, se busca mantener la secrecía de los nombres de los servidores públicos denunciados, es decir, el nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre esos actos y; por otro, se pretende dar acceso a información que es de interés de los ciudadanos porque versa sobre una afectación económica al erario público.
5. En tal contexto, si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento y se presume obtuvieron un beneficio personal, luego entonces **existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores o ex servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso, debiendo por tanto darse a conocer dicho dato, en caso de actualizarse la excepción a la excepción, prevista en el artículo 142 dela Ley de la materia, por lo que en el presente caso no se vulneran los derechos de la persona, aun cuando es plenamente identificada.**
6. A efecto de sustentar lo anterior, es aplicable por analogía la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en la Resolución del Recurso de Revisión de Acceso con número de folio RRA 12225/22, que en su parte conducente, señala lo siguiente:

*“****ANÁLISIS DE INTERÉS PÚBLICO***

*[...]*

*Señalado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime, para lo cual, resulta pertinente traer al estudio lo señalado en el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:*

*∙* ***Idoneidad:*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;*

*∙* ***Necesidad:*** *La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y*

*∙* ***Proporcionalidad:*** *El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis I.4o.A.70 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, página 2346, de agosto de 2006, Novena Época, materia común:*

***“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad****, la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido;* ***b) necesidad****, consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y* ***c) el mandato de proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado****. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio.”*

*Como se aprecia de la tesis citada, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, el problema se debe resolver atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, antes descritos.*

*En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.*

1. ***IDONEIDAD.*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de una finalidad constitucionalmente válida o apta para conseguir el fin pretendido.*

*El artículo 6 constitucional, apartado A, fracción I estipula que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.*

*Conforme a dicho precepto, el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", el cual contiene una doble dimensión: individual y social.*

*∙ En aspecto individual, maximiza el campo de la autonomía personal, posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto diversidad de datos, voces y opiniones.*

*∙ Mientras que, en el social, evidencia el valor instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas.*

*Así, el derecho de acceso a la información resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Al respecto, el interés de conocer los nombres de los servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre estos casos evidencia el ejercicio del derecho de acceso a la información, en virtud de que se trata de un caso relacionado con presuntos hechos de corrupción cometidos con recursos públicos.*

*En ese orden,* ***si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento en el erario*** *federal a través de los recursos públicos destinados al Servicio de Administración Tributaria que dejaron de ingresar con las que* ***se presume obtuvieron un beneficio personal****, luego entonces* ***existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso.***

*Por lo tanto, en el caso, prevalece el derecho de acceso a la información sobre la protección de su intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, toda vez que es el medio idóneo para la rendición de cuentas sobre la efectiva investigación de hechos relacionados con el desempeño de las funciones de los servidores públicos y ex servidores públicos de en relación con los hechos investigados, lo que deja en segundo lugar la necesidad individual de proteger sus nombres.*

1. ***NECESIDAD****. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.*

*A través del ejercicio del derecho a la información se cubre la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representan, en ese sentido, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las conductas denunciadas por parte del Servicio de Administración Tributaria que forman parte de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.*

*Esto es,* ***la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representa, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con los nombres de los servidores públicos y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre los casos denunciados, puesto que probablemente incurrieron en diversos delitos de corrupción****, tales como cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal, así como en la Convención Interamericana contra la Corrupción.*

*En este sentido, nuevamente el derecho de acceso a la información prevalece sobre la protección de la información solicitada, puesto que el sacrificio que implica la revelación de los nombres de los servidores públicos y ex servidores es el medio menos oneroso para que la sociedad conozca quiénes de los servidores públicos o ex servidores públicos, que supuestamente velan así por el manejo y la debida aplicación de fondos y recursos federales, probablemente están involucrados en el desvío de dichos recursos, lo cual, de ser el caso, indudablemente repercute en la economía del país, así como el nombre de cualquier otra persona involucrada en los hechos.*

*Es decir, si se negara el derecho de acceso a los datos peticionados, -en el caso concreto- se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades de investigación, en este caso, respecto de los delitos catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal.*

1. ***PROPORCIONALIDAD****. El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*Conforme a lo expuesto,* ***si bien se causa un perjuicio a la intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, de los servidores y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre diversos casos****, lo cierto es que,* ***divulgar sus nombres representa un beneficio mayor para la sociedad puesto que rinde cuentas sobre quiénes están probablemente implicados en conductas relacionadas con hechos de corrupción****.*

*Sumado a lo anterior, debemos recordar que uno de los señalamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo cual ha sido ratificado por México, es que la corrupción atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia.*

*De manera que, si la Fiscalía General de la República aperturó diversas carpetas de investigación en contra de las personas que posiblemente cometieron actos de corrupción, el hecho de que dé a conocer sus nombres, independientemente de que se encuentre en la fase de investigación, significaría rendir cuentas del compromiso del Estado Mexicano en el combate a la corrupción ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y frente a la sociedad nacional e internacional.*

*En este sentido, se robustece la necesidad de que impere el derecho de acceso a la información sobre los principios antes referidos, toda vez que es proporcional la satisfacción de la sociedad de conocer la información de interés, toda vez que, de ser el caso, la declaración de inocencia, en su momento, los liberará de los señalamientos a que haya lugar.*

*Por tanto, es posible concluir que, en la ponderación realizada, se cumple con los tres elementos para dotarle de preminencia al derecho de acceso a la información, a efecto de poder entregar la información relativa a los servidores o ex servidores denunciados pues con el análisis de interés público* ***no es posible clasificarla en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.”***

* **De los procedimientos sobre faltas administrativas concluidas.**

1. Ahora bien, para el caso de que la información se encuentre relacionada con procedimientos por faltas administrativas concluidas, como se mencionó en líneas anteriores, solo pueden ser dadas a conocer las **responsabilidades administrativas por faltas graves condenatorias**, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que establece que **las sanciones no graves no serán públicas**, **así como las graves absolutorias**, en virtud de que dichas faltas, **no tienen una trascendencia social,** pues no existe un daño externo, sino que únicamente le atañe al servidor público en cuestión.
2. En este entendido, es evidente que, en caso de existir procedimientos concluidos instaurados en contra de los servidores públicos de las dependencias del Sujeto Obligado, **por faltas graves absolutorias** y **no graves condenatorias o absolutorias**, dicha información tiene el carácter de confidencial, y por tanto debe clasificarse el nombre y cargo de los servidores públicos en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. No obstante, si los procedimientos concluidos se relacionan con faltas administrativas **graves condenatorias** y estas han quedado firmes, es decir, que el procedimiento ya no acepta recurso o medio de defensa alguno, es procedente entregar el soporte documental a la parte **RECURRENTE** que dé cuenta del nombre y cargo de los servidores públicos cuyos procedimientos se encuentren concluidos y que hayan causado estado, por faltas administrativas graves condenatorias, así como de aquellos que se encuentren en trámite relacionados con actos de corrupción, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia Local, del primero de enero al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en versión pública para el caso de que el mismo contenga datos personales susceptibles de protegerse, reiterando que en dicho supuesto, no se vulnera el derecho del servidor público referido, aun cuando este sea plenamente identificable.
4. Lo anterior, ya que como se precisó en párrafos anteriores, proporcionar la información de referencia, garantizaría la rendición de cuentas por parte del **SUJETO OBLIGADO**, relativo a su actuación, teniendo como consecuencia que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades, al poder conocer información derivada de los procedimientos administrativos que hayan concluido con resolución en donde se determine que un servidor público tuvo responsabilidades graves, relacionadas al ejercicio de las funciones. Además que, con dicha información, se estaría revelando que el desempeño del servidor público, en caso de haber sido sancionado, no fue conforme a derecho.

* **De las Denuncias**

1. Ahora bien, como en la solicitud de información el **RECURRENTE** quiere conocer si la persona referida en la solicitud de información de ser el caso que fuera servidor público del **SUJETO OBLIGADO** hubiera tenido denuncias, se analiza lo siguiente.
2. De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra denuncia deviene de la acción de notificar **a las autoridades** competentes un hecho **delictivo** o **irregular para que se investigue y se tomen las medidas correspondientes,** siendo estos hechos delictivos de ubicación dentro de la rama del derecho público en el derecho penal.
3. De lo anterior, se debe de mencionar que de manera enunciativa más no limitativa la **interposición de una denuncia** en contra de **servidores públicos**, puede **derivar de un mal uso del poder o cargo público conferido, lo cual se relaciona con la comisión u omisión a infracciones o faltas administrativas consideradas graves.**
4. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal ordinario comprenderá las siguientes fases:

*“****I.*** *La de investigación, que comprende las siguientes fases:*

***a)*** *Investigación inicial, que* ***comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente*** *y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e*

***b)*** *Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;*

***II.*** *La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y*

***III.*** *La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.”*

(Énfasis añadido)

1. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
2. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.
3. **Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de** querella o de **cualquier** otro **requisito** equivalente **que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda**. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten[[7]](#footnote-7).
4. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales[[8]](#footnote-8). Por otro lado, si la denuncia se presenta ante la Policía, ésta informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público[[9]](#footnote-9).
5. Por otro lado, existen dos formas de iniciar la investigación: de oficio y por querella. La primera, implica que el Ministerio Público inicie inmediatamente la investigación derivado de la *notitia criminis* en razón de su impacto y tipicidad; esto usualmente con la comisión de delitos graves.
6. Por su parte, la **querella** es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente[[10]](#footnote-10)
7. Ahora bien, la **cadena de custodia** es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión[[11]](#footnote-11).
8. Existirán tres formas de terminación de la investigación ajenos al ejercicio de la acción penal, a saber:
   1. *Facultad del Ministerio Público de abstenerse a investigar[[12]](#footnote-12): Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.*
   2. *Archivo temporal[[13]](#footnote-13). El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.*
   3. *No ejercicio de la acción penal[[14]](#footnote-14): Previo a la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.*
9. Por cuanto hace a los datos de prueba, cualquier hecho podrá ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica[[15]](#footnote-15).
10. Ahora bien, para la **audiencia inicial** del procedimiento penal, se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la **imputación**, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación[[16]](#footnote-16).
11. A fin de formular la imputación conforme a derecho, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley[[17]](#footnote-17).
12. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso[[18]](#footnote-18).
13. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que[[19]](#footnote-19):
    1. *Se haya formulado la imputación;*
    2. *Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;*
    3. *De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y*
    4. *Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.*
14. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento[[20]](#footnote-20). Antes de finalizar la audiencia inicial, el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria[[21]](#footnote-21).
15. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá[[22]](#footnote-22):
    1. *Solicitar el sobreseimiento parcial o total;*
    2. *Solicitar la suspensión del proceso, o*
    3. *Formular acusación.*
16. La formal acusación por parte del Ministerio Público, iniciará la etapa intermedia del proceso, el cual tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio[[23]](#footnote-23).
17. De conformidad con lo establecido por el numeral 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación deberá considerar los siguientes elementos:

*“****Artículo 335****. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:*

***I.*** *La individualización del o los acusados y de su Defensor;*

***II.*** *La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;*

***III.*** *La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;*

***IV.*** *La relación de las modalidades del delito que concurrieren;*

***V.*** *La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado;*

***VI.*** *La expresión de los preceptos legales aplicables;*

***VII.*** *El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;*

***VIII.*** *El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;*

***IX.*** *La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos;*

***X.*** *Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;*

***XI.*** *La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;*

***XII.*** *La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y*

***XIII.*** *La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.”*

1. Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. La Defensa podrá promover las excepciones que procedan[[24]](#footnote-24).
2. Posteriormente, y una vez establecidos los acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente[[25]](#footnote-25).
3. Finalizada la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar[[26]](#footnote-26):
   1. *El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio;*
   2. *La individualización de los acusados;*
   3. *Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación;*
   4. *Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes;*
   5. *Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada;*
   6. *Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño;*
   7. *Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan;*
   8. *Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y*
   9. *Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.*
4. Finalmente, la etapa de **juicio** será el periodo de **decisión** de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad[[27]](#footnote-27).
5. Una vez recibido el auto de apertura a juicio oral, el Tribunal de enjuiciamiento deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia[[28]](#footnote-28).
6. En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella[[29]](#footnote-29).
7. Abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra al Asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral[[30]](#footnote-30).
8. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponderá recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa[[31]](#footnote-31).
9. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate[[32]](#footnote-32).
10. Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o miembro del Tribunal[[33]](#footnote-33).
11. Concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo[[34]](#footnote-34).
12. De acuerdo con lo establecido por el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fallo que emita el Tribunal de enjuiciamiento deberá señalar:
    1. *La decisión de absolución o de condena;*
    2. *Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y*
    3. *La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan*
13. Por cuanto hace a la redacción de las sentencias absolutorias y condenatorias, deberán atender lo establecido en los diversos 405 y 406 del Código Nacional Procesal de mérito, mismos que establecen lo siguiente:

*“****Artículo 405. Sentencia absolutoria***

*En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente.*

*En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:*

***I.*** *Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;*

***II.*** *Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o*

***III.*** *Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida.*

***Artículo 406. Sentencia condenatoria***

*La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.*

*La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.*

*La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.*

*El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.*

*Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.*

*El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.*

*Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.*

*La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.*

*En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.”*

1. Establecido lo anterior, el Código Penal del Estado de México reconoce y enlista, dentro de su Título Sexto, los **Delitos por Hechos de Corrupción** que cometan **los servidores públicos** o particulares que hagan un mal uso de sus facultades, potestades o atribuciones conferidas por el Estado.
2. Al respecto, cabe referir que será reconocido como *servidor público* a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos[[35]](#footnote-35).
3. Dicho lo anterior, como de menciono en párrafos anteriores las denuncias interpuestas en contra de servidores públicos pueden tener relación con delitos derivados en actos de corrupción que tengan relación con las faltas administrativas graves, mismas que fueron precisadas con antelación al señalar cuales son las faltas administrativas graves en las que puede incurrir un servidor público.
4. Como puede advertirse, los **delitos por hechos de corrupción** se relacionan de forma intrínseca con las **faltas administrativas graves** establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; por lo tanto, resultaría de interés público que se diera a las denuncias que tengan relación con este tipo de delitos.
5. Por lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá realizar una nueva búsqueda en sus archivos, donde no podrá omitir a la **Contraloría Interna** y a la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de entregar la información referente a **las denuncias interpuestas en contra de la persona referida en la solicitud de información, de ser el caso que sea servidor público o hubiera sido y tenga**  en relación con los procedimientos penales por actos de corrupción.
6. Ahora bien, respecto de “**De los procesos penales desglosar por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha y lugar de los hechos, fecha de la audiencia inicial, fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial**, se entiende que con la información que entregue el **SUJETO OBLIGADO se tendrá por colmado este punto de la solicitud de información, al entregar información que esté relacionada con actos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.**
7. Sin embargo se debe de señalar que el **RECURRENTE** que la información sea desglosada de manera específica, por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Ley Loca de la Materia los sujetos obligados deben de hacer entrega de la información tal cual obre sus archivos, es decir que no implica que los mismos hagan resúmenes o calcules de la información existente.

*“Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

1. Por otro lado de ser el caso que la persona referida en la solicitud de información no hubiera sea o hubiera sido servidor público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bastará con el **SUJETO OBLIGADO** lo haga del conocimiento del **RECURRENTE** de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Local de la Materia.
2. De todo lo anteriormente expuesto es que no se puede tener por validado la clasificación del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo del **SUJETO OBLIGADO** en cuanto a que la persona referida en la solicitud de información hubiera formado parte del personal operativo, toda que las denuncias o los procedimientos administrativos puedan tener relación con actos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por lo que el **SUJETO OBLIGADO** debió de turnar la información al área habilitada, para que hiciera su respectivo pronunciamiento.
3. Por último, se debe de señalar que el **RECURRENTE** no señalo un periodo de búsqueda para, situación por la cual es aplicable el periodo de un año inmediato anterior a la fecha de la solicitud de información, de acuerdo con el siguiente criterio del INAI.

***03/19***

***Periodo de búsqueda de la información.***

*En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.*

1. De lo anterior, se colige que el periodo de búsqueda para dichos puntos de la solicitud de información será del once de julio de dos mil veintitrés al once de once julio de dos mil veinticuatro.

# **QUINTO. De la versión pública.**

# **Nociones generales.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** eventualmente pudiera obrar datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como reservada, el **SUJETO OBLIGADO** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
2. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los **Sujetos Obligados** serán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. En consecuencia de lo anterior, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **EL RECURRENTE,** por ello con fundamento en el artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información**00673/FGJ/IP/2024** que ha sido materia del presente fallo y se emiten los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **05243/INFOEM/IP/RR/2024** en términos del Considerando **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se **ORDENA** previa búsqueda exhaustiva y razonable entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, en versión pública **del once de julio de dos mil veintitrés al once de julio de dos mil veinticuatro,** la información siguiente:

a) Documento donde conste la adscripción incluyendo las anteriores, cargos, denuncias administrativas y/o penales y sanciones, al mayor grado de desagregación, relacionadas con el servidor público referido en la solicitud de información, cuando se trate de procedimientos administrativos o penales que se encuentren concluidos y se haya determinado una responsabilidad grave, o bien, se encuentren en trámite en algún procedimiento que se relacione con actos de corrupción o posibles violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso, de que no se tengan denuncias administrativas o penales; se haya iniciado algún procedimiento administrativo o penal que se encuentre en trámite (con excepción de los ya señalados anteriormente), o bien, se encuentre concluido y se haya determinado alguna responsabilidad no grave o la absolución, deberá proporcionar el Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, confirme la clasificación del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de procedimientos administrativos o penales, adscripción y cargos, en términos de los artículos 49, fracción II, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII, y 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición del RECURRENTE.

Para el caso de que no cuente con la información por procedimientos por falta grave concluidos, por no haberse generado, deberá de hacerlo del conocimiento del RECURRENTE en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO**. **NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente resolución, vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ EMITIENDO VOTO PARTICULAR; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tesis [A.]: I.1º.A.E.133 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 29, tomo III, abril de 2016, p. 2133. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tesis [A.]: I.10º.A.79 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 60, tomo III, noviembre de 2018, p. 2318. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 221, Ídem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 224, Ídem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 224, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 225, Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 227, Ídem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 253, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 254, Ídem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 255, Ídem. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 259, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 307, Ídem. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 311, Ídem. [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 315, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 316, Ídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 318, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 321, Ídem. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 324, Ídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Artículo 335, Idem. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 344, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibídem. [↑](#footnote-ref-25)
26. Artículo 347, Ídem. [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 348, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-27)
28. Artículo 349, Ídem. [↑](#footnote-ref-28)
29. Artículo 391,Ídem. [↑](#footnote-ref-29)
30. Artículo 394, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-30)
31. Artículo 395, Ídem. [↑](#footnote-ref-31)
32. Artículo 399, Ídem. [↑](#footnote-ref-32)
33. Artículo 400, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-33)
34. Artículo 401, Ídem. [↑](#footnote-ref-34)
35. Artículo 328, Código Penal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-35)